

REPÚBLICA DE COLOMBIA**RAMA JUDICIAL****TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN****Medellín, trece (13) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)**

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), VICTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, vencido el traslado establecido en la ley, procede a dictar la decisión correspondiente en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO en contra de la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A. y la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-. (Rad. No.05-001-31-05-009-2021-00541-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, a la abogada Laura Vanessa Murillo Madrid, con tarjeta profesional No. 286.193 del C.S. de la J., conforme al poder que le fue conferido.

ANTECEDENTES

Pretende el demandante que se declare la ineficacia del traslado del RPM al RAIS a cargo de Porvenir S.A.; en consecuencia, que ha pertenecido al RPM sin solución de continuidad en la afiliación; además se condene a Porvenir S.A. a trasladar con destino a Colpensiones la totalidad de los aportes efectuados al RAIS, debidamente indexados con sus respectivos rendimientos financieros, bonos, cotizaciones, sumas adicionales recibidas por concepto de aportes obligatorios y rendimientos devengados durante todo el tiempo en que dichas sumas de dinero estuvieron en poder de la administradora.

Como sustento de lo solicitado, afirma: Nació el 16 de septiembre de 1963; su primera vinculación al Sistema General de Pensiones se dio al régimen de

prima media el 18 de febrero de 1988, siendo la entidad el ISS, hoy Colpensiones; se afilió al régimen de ahorro individual el día 14 de mayo de 2009, con efectividad el 1 de julio de 2009, con el fondo de pensiones HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS, hoy SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR S.A.; tal decisión estuvo sustentada en una falta de información, pues no se le brindó asesorías ni al momento de la afiliación, ni antes de cumplir 52 años de edad; nunca le informaron de las condiciones que conllevaba dicho traslado, ni las diferencias entre el RPMPD frente a la edad, monto, capital, etc., entre otros requisitos referentes a su pensión de vejez; el día 21 de julio de 2021 le solicitó a COLPENSIONES efectuar y aprobar su traslado, pero esta solicitud le fue negada.

La Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES- atendió de manera oportuna la demanda oponiéndose a la prosperidad de todas y cada una las pretensiones, en tanto considera que no existió ningún vicio en el consentimiento. Frente a los hechos, aceptó la edad, la afiliación a la entidad, la solicitud que se le presentó y la respuesta que se le entregó; como excepciones de mérito propuso las que denominó: inexistencia de la obligación, buena fe, imposibilidad de condena en costas y prescripción, entre otras.

Porvenir S.A. se opuso igualmente a todas y cada una las pretensiones, sosteniendo que la afiliación del actor se realizó de manera libre y voluntaria, y que este tenía un verdadero ánimo de vincularse al RAIS. Frente a los hechos, aceptó la vinculación al RAIS, y de los demás manifestó que no eran ciertos o que no le constaban. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación y compensación.

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 5 de septiembre de 2023, ordenó lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR ineficaz el cambio o el traslado del sistema pensional de Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual que realizó el señor JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO identificado con CC. 70.560.887, en consecuencia, declarar que siempre ha permanecido afiliado sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida que es administrado actualmente por COLPENSIONES.

SEGUNDO: Se CONDENA a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia a COLPENSIONES el saldo existente en la cuenta de ahorro individual del demandante JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO junto con sus correspondientes rendimientos financieros, frutos e intereses y los bonos pensionales si hubieren sido ya redimidos y contar con sus propios recursos deberá trasladar con indexación lo descontado por el fondo de garantía de pensión mínima los gastos de administración y el valor de primas de seguro previsional y reaseguros, al momento de cumplirse esta orden los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores junto con el detalle pormenorizado de los ciclos IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

TERCERO: Se CONDENA a COLPENSIONES a recibir de la AFP PORVENIR S.A. los valores aludidos e incorporarlos como semanas válidamente cotizadas por el señor JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida imputándolos a los periodos en que fueron cotizados en el RAIS, el IBC que fueron efectivamente cancelados.

CUARTO: Se DECLARA no prospera las excepciones de mérito, así como las demás excepciones de mérito que fueron propuestas por las partes codemandadas, de conformidad con los argumentos previamente expuestos atendiendo a la naturaleza condenatoria de la decisión proferida.

QUINTO Se CONDENA en costas a la AFP PORVENIR S.A., se fijan agencias en derecho por la suma de \$2.320.000 a favor de la demandante que deberán ser pagados de manera proporcional por cada una de las codemandadas, no se imponen costas a cargo de COLPENSIONES.

SEXTO: Se concede a favor de COLPENSIONES el grado jurisdiccional de consulta en caso de que no se haga uso del recurso de apelación.

Inconforme con la decisión proferida, la apoderada de Porvenir S.A., presentó recurso de apelación en contra de la sentencia proferida. En términos generales afirma que no comparte la decisión de la declaratoria de ineficacia del traslado con base a la falta de información, en tanto al interior del proceso se logra evidenciar que las situaciones de tiempo, modo y lugar difieren de las presentadas en la demanda, destacando que, en el interrogatorio de parte, el demandante desconoce el formulario de afiliación, de igual forma el señor JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO indica que desconoce la firma que está allí plasmada y niega denuncias o quejas que haya realizado para del desconocimiento de dicho formulario. Se destaca la relevancia de que el demandante reconoce su traslado a Porvenir en 2009, mediante un comunicado del ISS, hecho omitido durante el proceso. Se hace referencia a

la sentencia del magistrado Hugo Alexander Ríos Garay 2020-261 de 31 de marzo de 2023, que establece que los supuestos fácticos en la demanda no se ajustan a las circunstancias del traslado y no fueron objeto de debate probatorio. Se afirma también que las demandadas contestaron la demanda sin abordar las controversias sobre el comportamiento del empleador, quedando este aspecto fuera del problema jurídico. Agrega que no es válido el uso de facultades ultra y extra petita para favorecer al demandante, ya que no se presentaron hechos relacionados con las reales circunstancias del traslado. Por último, subraya la injusticia de imponer condenas basadas en supuestos fácticos no mencionados en la demanda y sobre los cuales las demandadas no tuvieron oportunidad de pronunciarse. En consecuencia, se solicita que el Tribunal excluya las circunstancias fácticas no relacionadas en la demanda. Por último, expresa inconformidad frente a los descuentos ordenados, en tanto estos no se ajustan a la normatividad vigente. Es más, se encuentran prescritos porque no forman parte del capital requerido para otorgar las prestaciones correspondientes. Frente a la indexación, refiere una decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali, para solicitar su revocatoria porque los rendimientos de la cuenta de ahorro individual superan este concepto.

En el término pertinente, tanto el apoderado la parte recurrente como el de Colpensiones, presentaron sus alegaciones de segunda instancia. En lo fundamental solicitaron que se revoque la decisión de primer grado y, en su lugar, se absuelva de la ineficacia pedida. Los argumentos fueron semejantes a los expuestos en los respectivos escritos de contestación de la demanda, con la diferencia que el de Porvenir insiste en que los descuentos ordenados, incluyendo la indexación, deben también revocarse, pues existen razones legales para haberlos realizado, y el de Colpensiones, para el evento en que se mantenga la ineficacia, solicita que esta condena se mantenga en su integridad.

CONSIDERACIONES.

La Sala restringirá su estudio a los puntos objeto de apelación planteados por la parte recurrente, conforme a las directrices que para el efecto traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001. Aquellas condenas u órdenes impuestas a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones que no hayan sido apeladas, serán

estudiadas por la vía de la consulta (art. 69 del C.P. del T. y de la S.S.), de conformidad con el criterio expresado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencias del 26 de noviembre y 4 de diciembre de 2013, rads. 34552 y 51237, y más recientemente por la sentencia de tutela SLT7382-2015 (Rad. 40200).

Fuera de toda discusión, por obrar plena prueba de ello en el plenario, se encuentran los siguientes hechos: la fecha de nacimiento del demandante: 16 de septiembre de 1963 (archivo 02 página 15); que el 18 de febrero de 1988 se afilió al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones (archivo 07 página 52); que el 14 de mayo de 2009 se trasladó al RAIS, vinculándose a la AFP Porvenir S.A. (archivo 11 página 69), y cuya efectividad se dio el 1 de julio de 2009 (archivo 11 página 69); y por último, que en la actualidad permanece afiliado a esta administradora.

Partiendo entonces de lo que debe estudiarse por el recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A., del grado de consulta, del contexto de los hechos y pretensiones de la demanda, y por supuesto de lo decidido, lo primero a esclarecer es si el traslado realizado por el demandante del RPMPD al RAIS fue o no ajustado a la ley, y en caso de que no lo hubiere sido, analizar si hay lugar o no a la devolución de aportes, rendimientos y demás ítems. Esto implica establecer, entre otros asuntos, si la voluntad del señor TAMAYO JARAMILLO al momento de trasladarse del RPMPD al RAIS estuvo afectada por un vicio en el consentimiento o conducta antijurídica semejante.

Para estos fines, y dado el poder vinculante de la jurisprudencia de las altas cortes, entre otras razones porque una de sus funciones esenciales es la de velar por la unidad e integridad del ordenamiento jurídico (art. 86 del CPTSS y 333 del CGP), criterio que ha destacado la Corte Constitucional en muchas de sus decisiones (véase entre otras la C 539 de 2011 y la SU 354 de 2017), la Sala estima del caso hacer referencia textual a algunos apartes de la sentencia dictada por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 2019 (SL1688-2019, Rad. 68838, ratificada, entre otras, en las sentencias SL1741-2021, SL1743-2021 y SL1942-2021), la cual compendia para el día de hoy, con total claridad y precisión, además de una adecuada sustentación, el estado de la materia en asuntos de ineficacia de traslados de régimen pensional por falta de una adecuada información, las consecuencias de la declaración dada por los afiliados en los documentos de traslado de

régimen, la carga de la prueba, y los alcances de la ineficacia y lasre asesorías que se realizan con posterioridad al traslado inicial, entre otros, y que le dan respuesta adecuada, de manera directa o indirecta a los distintos puntos que habrán de estudiarse en esta providencia, en especial al de determinar si la decisión de la juez de primer grado puede o no avalarse. Sobre el deber de información, en ésta quedó dicho:

“El anterior recuento sobre la evolución normativa del deber de información a cargo de las administradoras de pensiones podría, a grandes rasgos, sintetizarse así:

Etapa acumulativa	Normas que obligan a las administradoras de pensiones información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición V la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3º, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarle
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	1748 de 2014 Artículo 3.º del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa n.º 016 de 2016	Junto Con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

1.4 Conclusión: La constatación del deber de información es ineludible

Según se pudo advertir del anterior recuento, las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar

una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. Desde luego que con el transcurrir del tiempo, el grado de intensidad de esta exigencia cambió para acumular más obligaciones, pasando de un deber de información necesaria al de asesoría y buen consejo, y finalmente al de doble asesoría. Lo anterior es relevante, pues implica la necesidad, por parte de los jueces, de evaluar el cumplimiento del deber de información de acuerdo con el momento histórico en que debía cumplirse, pero sin perder de vista que este desde un inicio ha existido.

Así las cosas, el Tribunal cometió un primer error al concluir que la responsabilidad por el incumplimiento o entrega de información deficitaria surgió con el Decreto 019 de 2012, en la medida que este exista desde la expedición de la Ley 100 de 1993, el Decreto 663 de 1993 y era predicable de la esencia de las actividades desarrolladas por las administradoras de fondos de pensiones, según se explicó ampliamente.

Adicionalmente, la Sala no puede pasar por alto la indebida fundamentación con la que la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal de Medellín emitió su sentencia, pues sin razón alguna se limitó a señalar que a partir del Decreto 019 de 2012 es imputable responsabilidad por omisión o cumplimiento deficitario del deber de información a las AFP, sin especificar la norma de ese decreto que le daba sustento a su dicho y sin la construcción de un argumento jurídico que soportara su tesis. Es decir, la sentencia estuvo desprovista de una adecuada investigación normativa y un discurso jurídico debidamente fundamentado.

En cuanto a las consecuencias de las constancias que se registran en los formularios de afiliación o traslado, se dijo:

2. El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente. Necesidad de un consentimiento informado

Para el Tribunal el consentimiento informado no es predicable del acto jurídico de traslado, pues basta la consignación en el formulario de que la afiliación se hizo de manera libre y voluntaria.

La Sala considera desacertada esta tesis, en la medida que la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos reimpresos de los fondos de pensiones, tales como «la afiliación se hace libre U voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no informado.

Sobre el particular, en la sentencia CSJ SI. 19447-2017 la Sala explicó:

Por demás las implicaciones de la asimetría en la información, determinante para advertir sobre la validez o no de la escogencia del régimen pensional, no solo estaba contemplada con la severidad del artículo 13 atrás indicado, sino además el Estatuto Financiero de la época, para controlarla, imponía, en los artículos 97 y siguientes que las administradoras, entre ellas las de

pensiones, debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios de buena fe «y de servicio a los intereses sociales» en las que se sancionaba que no se diera información relevante, e incluso se indicaba que «Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado».

Ese mismo compendio normativo, en su precepto 98 indica que al ser, entre otras las AFP entidades que desarrollan actividades de interés público, deben emplear la debida diligencia en la prestación de los servicios, y que «en la celebración de las operaciones propias de su objeto dichas instituciones deberán abstenerse de convertir cláusulas que por su carácter exorbitante puedan afectar el equilibrio del contrato o dar lugar a un abuso de posición dominante», es decir, no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada, tanto en el cambio de prima media al de ahorro individual con solidaridad, encontrándose o no la persona en transición, aspecto que soslayó el juzgador al definir la controversia, pues halló suficiente una firma en un formulario

De esta manera, el acto jurídico de cambio de régimen debe estar precedido de una ilustración al trabajador o usuario, como mínimo, acerca de las características, condiciones, acceso, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de los riesgos y consecuencias del traslado.

Por tanto, hoy en el campo de la seguridad social, existe un verdadero e insoslayable deber de obtener un consentimiento informado (CSJ Sl. 19447-2017), entendido como un procedimiento que garantiza, antes de aceptar un ofrecimiento o servicio, la comprensión por el usuario de las condiciones, riesgos y consecuencias de su afiliación al régimen. Vale decir, que el afiliado antes de dar su consentimiento, ha recibido información clara, cierta, comprensible y oportuna.

Como consecuencia de lo expuesto, el Tribunal cometió un segundo error jurídico al sostener que el acto jurídico de traslado es válido con la simple anotación o aseveración de que se hizo de manera libre y voluntaria y, por esa vía, descartar la necesidad de un consentimiento informado.

En materia de carga de la prueba del deber de información, anotó:

“En consecuencia, si se arguye que, a la afiliación, la AFP no suministró información veraz y suficiente, pese a que debía hacerlo, se dice con ello, que la entidad incumplió voluntariamente una gama de obligaciones de las que depende la validez del contrato de aseguramiento. En ese sentido, tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el trabajador no puede acreditar que no

recibió información, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en posición de hacerlo. Como se ha expuesto, el deber de información al momento del traslado entre regímenes, es una obligación que corresponde a las administradoras de fondos de pensiones, y su ejercicio debe ser de tal diligencia, que permita comprender la lógica, beneficios y desventajas del cambio de régimen, así como prever los riesgos y efectos negativos de esa decisión.

Y, por último, en cuanto al alcance de la ausencia del deber de información y de los nulos efectos que pueden generar las reasesorías posteriores, quedó dicho:

“Lo anterior, se repite, sin importar si se tiene o no un derecho consolidado, se tiene o no un beneficio transicional, o si está próximo o no a pensionarse, dado que la violación del deber de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo. Esto, desde luego, teniendo en cuenta las particularidades de cada asunto.

Con sustento en estos presupuestos, esta Colegiatura comparte la decisión proferida por la *a quo* en este aspecto de la ineficacia, de ahí que habrá de confirmarse este punto objeto de análisis, pues basta la mera ausencia de información al afiliado, clara, precisa y completa, para que se produzca la irregularidad del acto de cambio de régimen pensional, situación que fue exactamente la que ocurrió en la presente controversia; a la Sala no le queda la menor duda que la demandada, en este evento Porvenir S.A., al no haber arrimado al proceso prueba idónea y completa de la información que se le debió de haber brindado al señor JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO en el traslado realizado a esta entidad, y no inferirse ésta del interrogatorio de parte que se le formuló, ni mucho menos de la prueba documental obrante en el expediente, la consecuencia no puede ser otra diferente a la de declarar ineficaz tal acto y, por tanto, tener como vinculación válida la que tenía con el Régimen de Prima Media con Prestación definida.

Ahora bien, es cierto que el demandante en los hechos de la demanda, al relatar la manera como se vinculó al régimen de ahorro individual, expuso una versión diferente a la que manifestó en el interrogatorio de parte, pues mientras en la primera afirmó que recibió una deficiente información, en el segundo dijo que la firma que aparecía en el documento de vinculación no era la suya y que él nunca solicitó el traslado, es lo cierto que lo esencial en esta materia es que su afiliación a Porvenir S.A. debió estar precedida de una debida información, clara, precisa, documentada y completa, y esta prueba, que como se vio en

párrafos anteriores correspondía a la administradora, brilla por su ausencia. Siendo ello así no hay motivo para que la decisión de ineficacia tomada en la primera instancia sufra modificación alguna.

Resultando claro lo anterior, es preciso recordar que en decisiones de esta naturaleza las partes deben ser restituidas al estado anterior (art. 1746 del CCC), esto es, tener como afiliación válida la inicial, es decir, la que tenía el demandante con Colpensiones y, como consecuencia, que la entidad que actualmente maneja la cuenta de ahorro individual, es decir, Porvenir S.A., debe devolver a la administradora del RPMPD (Colpensiones) todas las cotizaciones a la primera, incluyendo sus rendimientos, descuentos por cuotas de administración, seguros previsionales, Fondo de Garantía de Pensión Mínima y otros deducidos, pues solo de esta manera se entiende que el restablecimiento es completo.

Para esto dicho, sirve de sustento las razones que al respecto ha dado la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, v. gr. en sentencia SL1421-2019, Rad. 56174, en la cual se dijo lo siguiente:

Sobre las consecuencias de la nulidad del traslado entre regímenes esta Sala en sentencia SL, del 8 de sep. 2008, rad. 31989, reiterada en varias oportunidades, adoctrinó:

[...]

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

Y de manera más precisa, en cuanto a todos los conceptos antes anotados, en sentencia del 29 de julio de 2020 (SL 2877 2020, Rad. 78667), expresó:

En el sub lite, la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos

retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.

Ahora, los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional cubre a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el accionante en el RAIS, aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implica dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen; en otros términos, es la inscripción en ese esquema pensional la que se cuestiona como una sola, lo que involucra a las demás AFP, así ellas no hayan intervenido, se reitera, en la primera admisión. Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal.

En igual sentido puede verse la SL4803-2021 (Rad. 88879) del 20 de octubre de 2021, en la cual de manera expresa y directa se refirió a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos, cuotas de administración, comisiones y descuentos para los seguros de invalidez y sobrevivencia.

También la apoderada recurrente cuestiona la condena impuesta por concepto de indexación frente a los descuentos realizados por cuotas de administración, seguros previsionales y Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Baste a este respecto anotar, para negarle toda prosperidad a este reparo, que la jurisprudencia laboral en forma reiterada y pacífica, siempre ha dispuesto que el reintegro de estos dineros debe ser total y completo, cosa que no sucedería si se devuelve una suma desvalorizada por razones de la inflación. Agréguese además que el renglón de rendimientos de la cuenta de ahorro individual no puede excluir la indexación, ya que son conceptos no solamente diferentes, sino que tienen como soporte sumas disímiles. En este sentido pueden verse las siguientes decisiones judiciales: SL3034 del 7 de julio de 2021, SL 3571 del 4 de agosto de 2021, SL3708 del 18 de agosto de 2021, SL3709 y SL3710 del 18 de agosto de 2021, SL3769 del 11 de agosto de 2021, SL891, SL 892 y SL896 del 23 de marzo de 2022, SL755 y SL756 del 9 de marzo de 2022, y SL1019 del 16 de marzo de 2022

En cuanto a la excepción de prescripción, en la cual insiste la apoderada recurrente, así como las demás excepciones propuestas, en especial las que propuso Colpensiones, las cuales se estudian por la vía de la consulta, se declararán no probadas: unas por no envolver hechos extintivos o modificativos de los derechos reconocidos, entre ellas las de inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar y buena fe; y otras, como la de prescripción, incluyendo en esta la que apunta a la prescripción de la acción de nulidad, por estar comprometido en su conjunto un derecho pensional. En la sentencia inicialmente citada se anotó:

Conforme lo explicado, los afiliados al sistema general de pensiones pueden solicitar, en cualquier tiempo, que se declare la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales y, por esta vía, que se reconozca a cuál de los dos regímenes pensionales (RPMPD o RAIS) se encuentran afiliados. Lo expuesto no es algo nuevo en la jurisprudencia del trabajo, pues incluso desde la sentencia CSJ SL795-2013 ya la Corte había adoctrinado que <<el asegurado está legitimado para interponer, en cualquier tiempo, reclamos relacionados con la afiliación, las cotizaciones, el ingreso base de cotización y todos aquellos componentes de la pensión>>.

Hay que mencionar que así como la declaración de ineficacia es imprescriptible, los derechos que nacen de ello también tienen igual connotación. En efecto, conforme al artículo 48 de la Constitución Política, el derecho a la seguridad social es un derecho subjetivo de orden irrenunciable, premisa que implica al menos dos cosas: no puede ser parcial o totalmente objeto de dimisión o disposición por su titular (inalienable e indisponible), como tampoco puede ser abolido por el paso del tiempo (imprescriptible) o por imposición de las autoridades sin título legal (irrevocable). En este sentido, la jurisprudencia del trabajo ha sostenido que el derecho a la pensión o a obtener su valor real, puede ser justiciado en todo tiempo. (CSJ SL8544-2016).

Con todo lo que fue analizado por esta colegiatura, quedan resueltas de manera explícita e implícita las inconformidades planteadas en el recurso de apelación interpuesto por la entidad recurrente, así como por el grado de la consulta a favor de Colpensiones.

En conclusión, y sin necesidad de otro tipo de consideraciones, el fallo de primer grado se habrá de confirmar en su integridad, incluido lo relativo a costas. Las de esta instancia, atendiendo a lo normado en el artículo 365-1 del CGP, estarán a cargo de Porvenir S.A. y a favor del demandante. Como agencias en derecho, se fija la suma de \$1.300.000 (1SMLMV).

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia objeto de apelación y consulta.

Costas a cargo de Porvenir S.A. Como agencias en derecho, se fija la suma de \$1.300.000 (1 SMLMV).

Notifíquese por EDICTO.

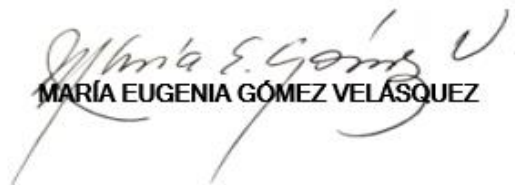
Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA
EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación:	05001310500920210054101
Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	JUAN CARLOS TAMAYO JARAMILLO
Demandado:	A.F. P. PORVENIR S.A.
M. P.	CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo:	13/03/2024
Decisión:	CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibídem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 14/03/2024 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario